

I

Se presenta a Informe el Anteproyecto de ley de lucha contra el dopaje animal en las competiciones deportivas. Dicha regulación legal deriva del mandato del legislador contenido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, que establece que, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la citada ley, el Gobierno deberá presentar un proyecto de ley de lucha contra el dopaje animal. Dicha previsión se contenía ya a su vez en la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, y posteriormente, la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

En la actualidad, dicha necesidad deriva igualmente de lo dispuesto en el artículo 16 del Código Mundial Antidopaje, que dice, en su apartado 16.1, que *“En todos los deportes en los que participen animales en Competición, la federación internacional del deporte en cuestión deberá establecer y aplicar normas antidopaje para los animales participantes. Las normas antidopaje deberán comprender una lista de sustancias prohibidas, procedimientos de control adecuados y una lista de laboratorios aprobados para el análisis de Muestras”*.

En consecuencia, la normativa para evitar el dopaje animal deriva de la necesidad de evitar el dopaje en las competiciones deportivas. No es descartable por supuesto una finalidad de proteger la salud de los animales que participan en dichas pruebas, pero ello resultaría más bien de la normativa que regula las prohibiciones de maltrato animal (por ejemplo, ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio) y no de la normativa reguladora del dopaje.

A su vez, y en el plano normativo, como señala el Informe del Consejo de Estado 135/2021, sobre el Anteproyecto de ley orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte, el primer instrumento internacional en la materia fue el Convenio del Consejo de Europa contra el dopaje, de 16 de noviembre de 1989, del que España es parte desde 1992 (BOE de 11 de junio de 1992).

Por otra parte, en el año 2003, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) elaboró el Código Mundial Antidopaje (CMA) y los estándares internacionales de procedimientos que lo complementaban, que constituían un conjunto de

reglas y directrices de obligado cumplimiento para el movimiento deportivo internacional. Estas actividades exigían la elaboración de normas nacionales, de forma simultánea a la armonización normativa internacional.

España ratificó la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, hecha en París en 18 de noviembre de 2005 (Convención de la UNESCO), cuyo texto e instrumento de ratificación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16 de febrero de 2007. Su artículo 3 dispone: "*los Estados Parte deberán: a) adoptar medidas apropiadas, en el plano nacional e internacional, acordes con los principios del Código b) ...*". Y su artículo 4 establece su relación con el Código Mundial Antidopaje, en los siguientes términos:

Artículo 4 - Relaciones de la Convención con el Código

1. Con miras a coordinar, en el plano nacional e internacional, las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, los Estados Parte se comprometen a respetar los principios del Código como base de las medidas previstas en el Artículo 5 de la presente Convención. Nada en la presente Convención es óbice para que los Estados Parte adopten otras medidas que puedan complementar las del Código"

El Consejo de Estado, en su Informe 135/2021 citado, entendió, como observación esencial, que el Estado ha de garantizar que la regulación en esas modalidades deportivas de la lucha contra el dopaje de los animales participantes responda a los estándares y los principios a los que se refiere en el CMA en ese artículo 16, atendiendo a la tipificación de infracciones y sanciones, así como a las debidas garantías de procedimiento y de acceso a los tribunales, como elementos primordiales que, una vez determinados por el legislador, podrán ser completados por las respectivas federaciones. Y a este principio responde la redacción del proyecto presentado, tal y como resulta de su Exposición de Motivos.

II

En materia específicamente relativa a protección de datos personales, el proyecto no hace mención alguna a dicha regulación.

Lo primero que cabe destacar es que, a diferencia de los datos de dopaje que contengan datos relativos a la salud regulados en la ley orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, -que siempre se refieren a personas físicas- los datos de salud que se regularían en el proyecto presentado no hacen referencia a personas físicas, sino a animales, y por lo tanto no pueden considerarse "datos relativos a la salud", ya que el art. 5.14 RGPD define «datos relativos a la salud» como datos personales relativos

a la salud física o mental *de una persona física*, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud. No sería necesario por tanto una causa específica de levantamiento de la prohibición de tratamiento prevista en el art. 9 RGPD, precisamente por no ser datos de salud, en los términos que requiere para la protección de estos el RGPD.

No obstante, dichos datos sí pueden considerarse “datos personales” (pero no “relativos a la salud”) desde el momento en que dicha información cabe conectarla con facilidad a una persona física identificada o identificable (por ejemplo, el dueño del caballo, que es considerado responsable de la infracción en el proyectado art. 2.1, letra a)). Así, al ser dichos datos “personales” se requiere siempre una base legitimadora para los tratamientos de datos de las previstas en el art. 6 RGPD, y por supuesto el cumplimiento de los principios relativos al tratamiento del art. 5 RGPD.

Esta Agencia considera que la base jurídica del art. 6.1.e) RGPD puede ser considerada para un tratamiento lícito de dichos datos personales: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

En nuestro Informe 077/2020, sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte, ya pusimos de manifiesto, siguiendo anteriores Informes sobre leyes anteriores relativas al dopaje, que:

El art. 43 de la Constitución no reconoce sólo el derecho a la protección de la salud (apartado 1), sino que su apartado 3 establece que “los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”. A su vez el art. 53.3 de la Constitución establece, para ambas finalidades, que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Es obvio que el fomento del deporte, como bien constitucional, es exclusivamente el del deporte “limpio”, que a su vez puede tener repercusión en la salud del deportista; no es este por tanto el único objetivo a conseguir, sino el propio fomento del deporte también es un fin en sí mismo. Véase sentencia del Tribunal Supremo 348/2017, de 1 de junio, (Civil, Rec. 2467/2016).

A su vez, el art. 6.3 RGPD establece que la base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser establecida por: a) el Derecho de la Unión, o b) el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. Asimismo, la finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), *será necesaria para el cumplimiento de una*

misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Dicha base jurídica *podrá* contener disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del presente Reglamento, entre otras: las condiciones generales que rigen la licitud del tratamiento por parte del responsable; los tipos de datos objeto de tratamiento; los interesados afectados; las entidades a las que se pueden comunicar datos personales y los fines de tal comunicación; la limitación de la finalidad; los plazos de conservación de los datos, así como las operaciones y los procedimientos del tratamiento, incluidas las medidas para garantizar un tratamiento lícito y equitativo, como las relativas a otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros cumplirá un objetivo de interés público y será proporcional al fin legítimo perseguido.

Esta Agencia considera que existe un objetivo de interés público en la preservación del deporte limpio, que justifica la injerencia en el derecho fundamental a la protección de datos personales de las personas físicas en los tratamientos regulados por el anteproyecto. A su vez, el art. 8 de la LOPDGDD requiere para estos casos que el tratamiento derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley, como es el caso.

III

Ahora bien, como se ha mencionado en el epígrafe anterior, el proyecto no contiene referencia alguna a la normativa de protección de datos. Como es obvio, al no estar incluida la materia regulada en el anteproyecto en ninguna de las excepciones del art. 2.2 RGPD, o 2.2 LOPDGDD, será de aplicación el RGPD y la LOPDGDD, y ello debería reflejarse así en el texto de la ley, pues aun no siendo necesaria sí establece una certeza a los operadores jurídicos acerca de la normativa aplicable a dichos tratamientos, y, sobre todo, a los derechos de los interesados.

Esta Agencia sugiere que se tome como base para dicha mención, y para el contenido de esta, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, que ha regulado extensamente esta cuestión en dicha norma, precisamente a /consecuencia del informe de esta Agencia 077/2020, ya citado, sobre dicho anteproyecto. Con la utilización del contenido de dicha disposición adicional se conseguiría una regulación completa, a los fines del art. 6.3 RGPD, y fijando de manera más precisa requisitos específicos de tratamiento, garantías y salvaguardas que “garanticen un tratamiento lícito y equitativo” (art. 6.2 RGPD).

Así, y sobre la base de la citada Disposición Adicional Cuarta de la LO 11/2021, se sugiere incluir en el anteproyecto una nueva disposición adicional que podría tener la siguiente redacción:

Disposición adicional XXXX. Protección de datos de carácter personal.

1. Los tratamientos de datos personales regulados en la presente ley se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En los casos en que dichos datos personales se traten a los fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, dichos tratamientos se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición se ejercitarán conforme a la normativa referida en el párrafo anterior.

2. Son datos de carácter personal objeto de su tratamiento para la consecución de las finalidades de interés público previstas en esta ley todos aquellos que resulten imprescindibles para el desarrollo y ejecución de las actuaciones, técnicas y procedimientos que se articulan en garantía del desarrollo de las competiciones deportivas limpias. En particular son objeto de tratamiento datos identificativos de las personas físicas relacionadas con los animales sujetos a la regulación sobre el dopaje en esta ley, así como de infracciones y sanciones administrativas y en su caso penales, entre otros.

3. Las finalidades perseguidas con el tratamiento de los datos recabados en virtud de las disposiciones de la presente ley son la prevención y persecución del dopaje en los deportes en que intervienen animales, así como también garantizar el desarrollo de las competiciones deportivas en términos de igualdad de acuerdo con las capacidades naturales de los animales que intervienen en dichas competiciones. También lo será el tratamiento de los datos recabados con fines estadísticos o para la realización de estudios de investigación científica.

4. Son responsables de los tratamientos previstos en esta ley, según el caso, las federaciones deportivas españolas y la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte.

5. Serán encargados del tratamiento de datos todas aquellas empresas, entidades, organizaciones o profesionales autónomos terceros que, para prestar servicios a las federaciones deportivas españolas o a la Agencia Española Comisión Española para la Lucha Antidopaje accedan y traten necesariamente datos de carácter personal de los que dichas federaciones o la Agencia Española Comisión Española para la Lucha Antidopaje sean Responsables de Tratamiento.

Los encargados del tratamiento realizarán su cometido de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento en virtud de lo establecido en artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679. En particular los procesos de realización de controles de dopaje serán realizados respetando las garantías establecidas en la legislación vigente.

6. Son destinatarios de los datos el Consejo Superior de Deportes, los laboratorios de control de dopaje, organizaciones nacionales e internacionales antidopaje, las federaciones deportivas nacionales e internacionales, los organizadores de competiciones deportivas, ligas profesionales o clubes o sociedades deportivas que tengan interés legítimo, órganos de resolución de conflictos cualquiera que sea su ámbito territorial, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los destinatarios serán también responsables del tratamiento de los datos que hubiera sido objeto de comunicación conforme a las disposiciones de la presente ley y a la normativa que les resulte de aplicación por el mismo tratamiento.

7. La base jurídica principal del tratamiento de acuerdo con el objetivo y finalidad de la presente ley es el cumplimiento de una misión realizada en interés público, así como el ejercicio de poderes públicos en el cumplimiento de una misión realizada en interés público de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6.1.e), y 89 del Reglamento (UE) 2016/679.

Además, existen tratamientos cuya base jurídica se encuentra en la letra c) del artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 en relación con el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como el consentimiento del interesado del apartado a) del mismo artículo para uno o varios fines específicos.

La base jurídica aplicable a las transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales y de acuerdo con la

declaración contenida en el considerando 112 del Reglamento (UE) 2016/679 que alude expresamente como excepción a la prohibición de transferencias la eliminación del dopaje en el deporte, será el artículo 49.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679.

8. Los datos recogidos se limitarán a los necesarios para el cumplimiento de las finalidades descritas, de acuerdo con el principio de minimización de datos.

9. La recolección de datos se hará conforme a la legislación vigente con especial atención al cumplimiento del deber de información previa a los interesados sobre las condiciones, derechos y obligaciones del tratamiento, así como a los posibles destinatarios en los términos previstos en la ley.

Los datos objeto de tratamiento podrán ser también comunicados a los órganos jurisdiccionales, al Ministerio Fiscal o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el ejercicio de sus competencias de investigación de delitos o faltas, sin perjuicio de la aplicación a su tratamiento de la legislación reguladora del ejercicio de la potestad jurisdiccional o las que en su caso resultaren de aplicación.

La comunicación de los datos de carácter personal de los interesados en los procesos de control de dopaje se realiza según la normativa de protección de datos aplicable y la establecida en la presente ley y en su normativa de desarrollo.

10. De acuerdo con la finalidad del tratamiento, se conservarán los datos recogidos en virtud de las disposiciones legales durante el tiempo necesario para el cumplimiento del fin para el cual fueron recogidos y en su caso por el tiempo necesario para atender a las responsabilidades derivadas de su tratamiento ante los órganos administrativos o jurisdiccionales competentes. Una vez transcurrido dicho periodo de conservación, los datos serán suprimidos de manera que se imposibilite la correlación o identificación de los mismos con los interesados.

11. Las administraciones públicas que sean responsables del tratamiento deberán garantizar la aplicación de las medidas de seguridad preceptivas que resulten del correspondiente análisis de riesgos, teniendo en cuenta, en todo caso, lo prevenido en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

Los demás responsables del tratamiento deberán garantizar la aplicación de las medidas de seguridad análogas a las anteriores, garantizándose el empleo de la tecnología adecuada para el tratamiento de datos, de acuerdo con el estado de la técnica y de las necesidades y

procurándose, en las comunicaciones que contengan información personal, el uso del cifrado o encriptado.

12. El ejercicio de derechos para las personas físicas sujetas a la normativa de protección de datos se garantizará conforme a dicha normativa. Serán atendidas las solicitudes de tales derechos por el responsable del tratamiento en los términos establecidos en la legislación vigente.